

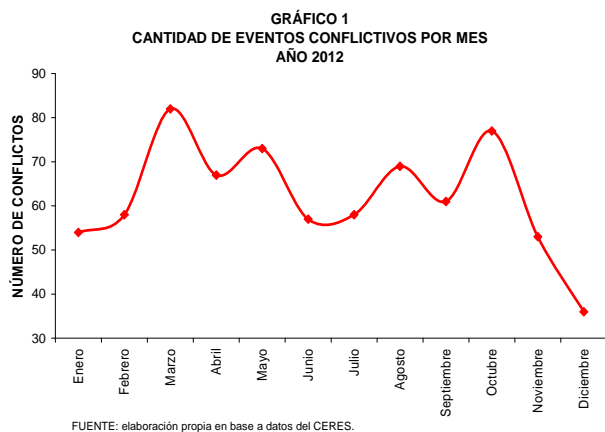
12 de abril de 2013

N° 189

Los conflictos en el 2012

El año 2012 se registraron 745 nuevos eventos conflictivos, dando un promedio de 62 conflictos mensuales. Esta cifra es inferior a la del año 2011, cuando el promedio superó los 73 conflictos al mes. Ese año marcó un record desde 1970 de acuerdo a los datos registrados por el Observatorio de Conflictos de Ceres, que coordina con Ciudadanía y recibe apoyo de Cosude.

Como se observa en el gráfico 1, los meses de mayor intensidad fueron marzo y octubre, y al final del año se observó una tendencia declinante, con la cantidad bajando hasta llegar a 36 en el mes de diciembre.



Aunque es alentadora la reducción de conflictos luego del record del 2011, sigue teniendo un nivel muy elevado. El promedio del 2012 ha sido superior al promedio de todo el periodo de gobierno de Evo Morales que hasta el 2012 llega a 55.3 conflictos al mes, o 1.84 conflictos diarios.

Este promedio es superior al del gobierno de Siles Zuazo y también al de Carlos Mesa. Pero el primero solamente duró tres años, y Mesa permaneció en el cargo solamente 20 meses. Un promedio tan elevado como el que corresponde a Morales nunca había durado tanto. Lo excepcional se está volviendo un hábito.

Esto implica que el costo económico de la conflictividad es muy alto y representa una pérdida de crecimiento que será imposible recuperar.

Aplicando los parámetros encontrados en el estudio econométrico de la relación entre conflictos y crecimiento entre 1970 y 2004 a los datos correspondientes al actual periodo de gobierno, se estima la pérdida económica anual por conflictos entre 1.6 y 3

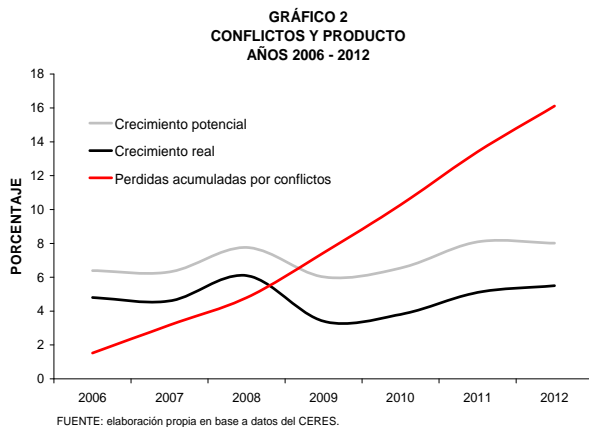
puntos de crecimiento anual del PIB dependiendo de la intensidad de los conflictos.

El gráfico 2 ilustra dichas estimaciones. La línea negra muestra las tasas de crecimiento real del PIB que Bolivia ha alcanzado. La línea suave muestra las tasas que pudieron alcanzarse si no se hubiera registrado tanta conflictividad.

Las pérdidas provienen de la interrupción del trabajo y la producción, del aumento en los costos de transacción y comercio y del desaliento a las inversiones debidas a la incertidumbre que generan.

La línea roja marca la acumulación de pérdidas en términos del PIB, medido en valores constantes.

En términos generales, el PIB real de la economía podría ser hoy un 16 por ciento más grande de lo que es si los bolivianos no hubiéramos protagonizado tantos paros, bloqueos, marchas y movilizaciones. También puede decirse que la pobreza sería menor y una proporción más elevada de la población estaría gozando hoy de mejores condiciones de vida.



Los conflictos sociales imponen a nuestra economía un costo superior al de la mediterraneidad.

Como se sabe, un estudio global sobre mediterraneidad y crecimiento encontró que países como Bolivia perdieron cerca del 1 por ciento del PIB cada año por su condición de país alejado de las costas marítimas. Pero dicho estudio no se refería a la disponibilidad o no de un puerto soberano, sino a la distancia territorial de las actividades económicas a los puertos marítimos. Esa distancia no puede modificarse en términos absolutos, pero sí se puede reducir su impacto económico con buenas vías de

comunicación que abaraten el transporte haciéndolo más veloz. No cambiaría en nada la situación si se tuviera acceso a una costa soberana pero sin infraestructura portuaria y de transporte.

Lo importante es tomar en cuenta que esa pérdida es inferior a la que causan los conflictos sociales. Si podemos atribuir a la geografía (o incluso a una guerra) la pérdida económica causada por la mediterraneidad, la que causamos nosotros con nuestro comportamiento conflictivo es nuestra responsabilidad. Es una pérdida de la cual sólo los bolivianos somos culpables.

Mucho se habla de la necesidad de poner en marcha una política de Estado que ayude a resolver el problema del enclaustramiento marítimo y, en las últimas semanas, se han dado algunos pasos decisivos a este respecto.

Con mayor razón sería necesario impulsar una política de Estado que permita superar la permanente agitación y conflictividad en el país. Ella resulta, como hemos señalado antes, más costosa que la mediterraneidad y resolverla, con seguridad, está más a nuestro alcance ya que no involucraría a otros países ni tampoco prolongados procesos judiciales o arbitrales.

¿Puede plantearse y desarrollarse una política de Estado que restablezca la paz social y disminuya los crecientes costos económicos y sociales de los conflictos?

Responder a ese cuestionamiento requiere comprender y reconocer el origen y la motivación de los conflictos, su lugar en la vida social y política del país, y la manera en que son manejados.

A este respecto se escucha con frecuencia la afirmación de que los conflictos están en correspondencia directa con las desigualdades sociales, con las situaciones de injusticia, o con la pobreza que enfrenta la mayoría de la población.

Si ello fuera cierto, la conflictividad no debería mostrar las profundas oscilaciones que se observan a lo largo de los años, ya que las mencionadas características no son recientes sino que se las ha identificado hace muchísimo tiempo casi como endémicas del país. Es más. Una mirada de largo plazo comprueba que la pobreza y la desigualdad se han reducido, y si ellas fueran la causa de los conflictos, éstos, en vez de aumentar, deberían tender a disminuir. Ocurre lo contrario, por tanto la causa es otra.

En efecto, los estudios realizados sobre los conflictos demuestran que la mayor parte no son protagonizados por los grupos menos favorecidos sino más bien por aquellos que ya han alcanzado un relativo nivel de bienestar y disponen de algunos recursos. Esos grupos muchas veces

emplean precisamente esos recursos para solventar sus movilizaciones.

En realidad, un análisis detallado de las motivaciones y demandas permite observar que una parte importante de los conflictos son movidos por el interés que tienen sus protagonistas de defender privilegios, por pequeños que sean, o de mejorar su acceso a recursos.

En la guerra del agua, en Cochabamba, los más activos fueron los regantes, campesinos dueños de pozos y vertientes, que temían perderlos con una nueva política de aguas que incluyera la disponibilidad masiva de Misicuni. Los campesinos sin agua, que iban a ser los más beneficiados, simplemente no participaron. Algo similar sucede con las movilizaciones de los cooperativistas mineros o los transportistas, que se resisten al cambio aunque su discurso diga lo contrario.

La tolerancia y pasividad gubernamental que han demostrado los últimos gobiernos, desde Bánzer hasta Morales, son otro factor que alienta los conflictos, ya que han dado legitimidad a la ruptura del orden y al quiebre de las leyes.

Muchos de estos problemas los resolvería una política de Estado que simplemente se concentre en defender el imperio de la ley y el estado de derecho y fortalezca las instituciones encargadas de administrar las normas.

Pero tal vez el mayor determinante de los conflictos sea la concentración de recursos en el Estado. Como se sabe, la principal fuente de financiamiento público son las rentas de recursos naturales, no los impuestos, de manera que las movilizaciones que demandan un aumento del gasto fiscal, directamente o a través de obras y subsidios, son realizadas a sabiendas de que ese aumento no tendrá una repercusión tributaria. Si la gente supiera que sus demandas tienen costos que pueden repercutir en sus bolsillos a través de los impuestos, sería sin duda más cautelosa, menos exigente en sus pedidos, y realizaría menos actos de presión.

Ya se sabe que la fortaleza de la condición ciudadana y de las instituciones democráticas tiene directa correspondencia con la importancia de la contribución impositiva en el financiamiento de los gobiernos. Pero, obviamente, no será posible implementar políticas tributarias de alcance universal mientras la población siga siendo pobre y el gobierno disponga, como si fueran suyos, los dineros que genera la explotación de los recursos naturales.

Romper esta lógica nos llevaría al cambio más urgente y efectivo, con efectos sostenibles para el bienestar. Esto exige compromiso y creatividad para una política de Estado que permita alcanzar todo nuestro potencial.